

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Las empresas aceleran ajustes de empleo por miedo a cambios en la ley

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA, Madrid
El año pasado las regulaciones de empleo se redujeron a la mitad y los procesos cerrados en enero continuaron en descenso. Pero sindicatos y abogados laboristas perciben que esa realidad ya está cambiando. La incertidumbre política propicia que las empresas anticipen expedientes de regulación de empleo (ERE) y otros ajustes, ante la posibilidad de que un nuevo Gobierno cambie la ley laboral. Se suma a la incipiente parálisis de inversiones y la deslocalización industrial.

"A la hora de disponer los expedientes de regulación de empleo, las organizaciones empresariales ponen en la balanza de su decisión el momento político que atraviesa España y la posibilidad de que la legislación cambie con un nuevo Gobierno", sostiene David Díaz, responsable del área laboral de Baker & McKenzie. El abogado opina que esta es una de las razones que contribuye a que el número de despidos se esté acelerando en el primer trimestre del año, un periodo que, por otra parte, es el que suelen elegir las empresas para decisiones estratégicas.

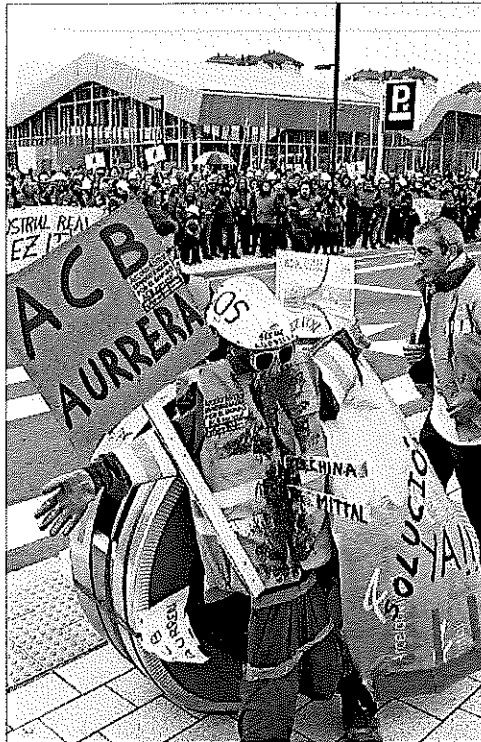
Se junta todo. Eso cree Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados. Su despacho aprecia un claro incremento de despidos colectivos en la primera parte de 2016. De hecho, actualmente tiene en tramitación media docena de ERE que afectan a cerca de 4.000 trabajadores, lejos de los máximos alcanzados en 2012, pero que revelan un cambio de tendencia.

"Hay empresas que no habían hecho el ajuste durante la crisis y lo hacen ahora. Otras que, pese a implementar despi-

dos, no han sido suficientes. Y algunas en las que la posibilidad de cambio político sí puede jugar un papel", aprecia Godino, quien, no obstante, considera que "las compañías ven que las perspectivas de recuperación de la economía son menos espectaculares de lo esperado y que la parálisis política ha frenado las inversiones. Las empresas tienen miedo en este contexto de incertidumbre".

En enero la cifra de afectados por despidos colectivos caía al mínimo histórico para ese mes, con 1.769 personas. Pero dos meses más tarde solo sumando tres de los ERE anunciados se roza esa cifra. En febrero Orange presentó un expediente para 550 de sus empleados. El de Sacyr afecta a entre 350 y 420 trabajadores. Y este mes FCC planteó la baja de 750.

Lo que se fragua en el sector industrial es más preocupante. "Están repuntando los ERE por la estrategia de deslocalización que siguen muchas empresas, por la reducción de costes y porque quieren aprovechar el favorable marco laboral antes de que pueda ser alterado", indica Toni Ferrer, representante de



Protesta de trabajadores de ArcelorMittal en Vitoria. J. A. RUIZ DE HIERRO (EFE)

Los grandes optan por bajas incentivadas

"Como consecuencia del enorme daño que ha provocado el ERE de Coca-Cola en su imagen, algunas de las grandes empresas españolas están optando por plantear grandes ajustes mediante procesos de bajas voluntarias. Es la respuesta de Telefónica o El Corte Inglés", sostiene Martín Godino, de Sagardoy Abogados, que alerta de que "ven-

drán más empresas". A finales de enero la operadora presidida por César Alierta provisionó 2.900 millones de euros para un plan de bajas incentivadas para hasta 7.000 trabajadores de más de 53 años. Y un mes después El Corte Inglés anunciaba un plan similar para 1.400 empleados mayores de 58 años. "Las bajas voluntarias generan menos conflictos e impactan menos en la reputación. Las grandes corporaciones se sienten en el ojo del huracán y no son libres de hacer lo que quisieran", apoya David Díaz, de Baker & McKenzie.

UGT. Ferrer pone sobre la mesa los casos de Altadis, Delphi, Bardí o Río Narcea, que piensan cerrar instalaciones de Logroño (471 empleados); Sant Cugat del Vallés (540); Mollet del Vallés (80); y la Mina Aguablanca de Monesterio, en Badajoz, (170).

Y no son los únicos. El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios de UGT, Ramón Ruiz, suma los desmantelamientos de la mina de Encasur en Puertollano (Ciudad Real) o de la planta de ciclo combinado de Elcogas en esa localidad, con 80 empleos cada una; el cierre de Lauki en Valladolid, con 85 trabajadores, o de Bimbo, en Palma de Mallorca, con 36. "Tenemos un problema muy grave con la minería por el incumplimiento del Plan del Carbón; el Gobierno no acaba de tomar decisiones de política energética", denuncia Ruiz.

Manuel García Salgado, responsable de Política Sectorial y Empleo de la Federación del Metal de UGT, cree que el repunte de los despidos colectivos tiene más que ver con la deslocalización que con el *impasse* político, "que si repercute en la ralentización de las inversiones, pero esa parálisis no se ha trasladado al empleo aún". Y suma a los casos anteriores los cierres de la acería de ArcelorMittal en Zumárraga (Guipúzcoa), con 325 empleados, o el desvío de la producción hacia Portugal de los grupos de componentes de automoción Antolin o Faurecia de Vigo, entre otros.

El secretario general de la Federación de Servicios de CC OO, José María Martínez, considera que "el movimiento general de repunte de los despidos colectivos unido al ciclo político se está dejando notar sobre todo en la mediana y pequeña empresa". Y David Díaz alerta del gotico de despidos individuales que está teniendo lugar, "un desgüe por el que se va mucho empleo".

Joaquín Estefanía

Millonarios patrióticos en EE UU

Un grupo de ultrarricos quiere salvar al sistema de sus excesos. En España sería imposible

Es imposible que un movimiento de esta naturaleza aparezca en España. Aquí se burlarían de ellos. Se llaman Millonarios Patrióticos y hace unos cuatro meses acudieron al Congreso de EE UU para demandar que les subiesen los impuestos en aras de una mayor cohesión del sistema. A ellos, a los ultrarricos, a aquellos que tienen unos ingresos anuales por encima del millón de dólares o poseen un patrimonio de más de cinco millones de dólares. Son alrededor de 200 personas.

La campaña se denominó *Liberar al Congreso*. ¿Por qué? Porque entienden que una de las causas de la gran desigualdad existente en EE UU es debida en gran medida (aunque no sólo) a la labor de *lobby* que las clases más pudientes han realizado durante décadas para obligar a la Cámara de Representantes y la del Senado a promulgar leyes impositivas destinadas a aumentar su riqueza personal y su poder político. El paroxismo tuvo lugar durante las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush. Uno de estos millonarios patrióticos declaró entonces, irónico: "Se podría pensar que somos radicales, pero no somos comunistas. Somos gente que ha tenido éxito en el sistema capitalista. El capitalismo es un excelente sistema, pero no es un sistema perfecto". Sus demandas eran un incremento del impuesto del patrimonio, una revisión de los agujeros fiscales por los cuales se

evaden legalmente impuestos y, además, un aumento del salario mínimo. Quieren salvar al capitalismo de sus propios excesos.

La semana pasada, la rama neoyorquina de Millonarios Patrióticos, unas 40 personas, envió una carta al gobernador del Estado, Andrew Cuomo (hijo del mítico Mario Cuomo), exigiéndole más impuestos para los de su clase social y manifestando su "profunda preocupación por las dificultades económicas que afrontan muchos ciudadanos y por las anticuadas infraestructuras del Estado que necesitan una atención desesperada (...). Esta inversión humanitaria y en infraestructuras físicas será amortizada a través de la creación de puestos de trabajo, de mano de obra preparada para ocuparlos y de una reducción de la extrema desigualdad de ingresos que afecta actualmente a nuestro Estado".

Estos millonarios son algo así como la generación siguiente de aquellos otros, como Warren Buffet, Bill Gates, etcétera, que hace unos años demandaron públicamente a la Administración de EE UU que recuperase el impuesto de donaciones y sucesiones en aras de una mayor igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Buffet, entonces el tercer hombre más rico del país, escribió en 2011 un artículo en *The New York Times* criticando al presidente Obama por permitir que los ciuda-

danos de clase media y baja carguen con el peso de las arcas públicas cuando los ultrarricos pagan pocos impuestos. "Mientras las clases medias y bajas luchan por nosotros en Afganistán, mientras los norteamericanos luchan por ganarse la vida, nosotros, los megarricos, continuamos teniendo exenciones fiscales extraordinarias". Buffet contó que había pagado en impuestos, en 2010, el equivalente al 17,4% de su renta, mientras sus empleados tributaron entre un 33% y un 41%.

En un momento en que la política económica hegemónica es la política monetaria, conviene recordar que los impuestos pueden ser un buen indicador del estado de la democracia. Si se acepta que la calidad de ésta aumenta en la medida en que los ciudadanos sean más iguales, la presencia de un sistema tributario progresivo, reduciendo las desigualdades de renta y riqueza, puede verse como un instrumento que contribuye a mejorar la calidad democrática y, también, como un reflejo de la misma. La falta de progresividad en los sistemas tributarios actuales es el resultado de un proceso de redistribución a la inversa que se inició en los años ochenta del siglo pasado y que supuso una ruptura silenciosa con lo que había venido sucediendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Los estadounidenses millonarios patrióticos quieren dejar de ser un oxímoron.